

## Editorial

En ocasiones anteriores hemos señalado las razones en que se apoya nuestro convencimiento de que el *rationale* sociopolítico necesario para el planteamiento de una verdadera reforma educativa sólo puede ser proporcionado por una teoría de naturaleza conflictual-coactiva.

Es evidente que la aplicación de esta teoría, como directriz de determinadas estrategias educativas, resulta extremadamente difícil; pues para ello es necesario, entre otras cosas, conocer suficientemente la estructura y mecanismos distributivos del poder, así como los procesos a través de los cuales es posible mantener en un estado de equilibrio inestable los conflictos existentes entre los diversos grupos integrantes de la sociedad.

Los análisis realizados en torno al papel que juega la educación en el sistema social han arrojado numerosas evidencias, que permiten rechazar la hipótesis que conceptualiza a la sociedad como un conjunto de elementos armónica y funcionalmente integrados. Por eso hemos aceptado como válida la imagen de una sociedad plagada de conflictos latentes, originados en agudas divergencias de intereses, actitudes y valores entre los grupos que la integran. En tales condiciones, ya lo hemos dicho repetidamente, cualquier reforma educativa de tipo convencional será de dudosa eficacia si lo que con ella se pretende es contribuir a instaurar un orden social más justo y democrático. Sin embargo, una reforma verdaderamente eficaz no puede ser implementada mientras no se determinen con precisión los roles que desempeñan los diversos elementos integrantes de las estructuras de poder o, dicho de otro modo, mientras no se disponga de un análisis suficientemente refinado de los procesos políticos, sociales y culturales *concretos* que mantienen y reproducen la estructura de clases.

Por otra parte, la mayoría de los análisis disponibles sobre la cultura política, la estructura y funcionamiento del poder en México, la composición real de nuestro sistema de estratificación social, etc., sólo se han podido colocar a un nivel de abstracción relativamente alto. De este modo, resulta muy difícil derivar de ellos una serie de formulaciones concretas y coherentes para la implementación de una verdadera reforma de la educación mexicana.

A pesar de todo, el tiempo apremia. La divergencia entre los valores sociales que muchos deseamos y los antivalores reflejados en las pautas de relaciones interpersonales en que se fundamenta la sociedad en que vivimos, es cada vez más evidente y aguda.

Por tanto, son cada día más numerosos y nutridos los grupos de educadores independientes que se empeñan en la búsqueda de estrategias

educativas capaces de contribuir a la promoción de un cambio social en la dirección deseada. En muchos casos, estos grupos han intentado diseñar experimentos educativos apoyados en el *rationale* conflictual-coactivo; pero la eficacia de tales experimentos está condicionada, como es obvio, a la resolución de múltiples problemas teóricos y metodológicos —manifestados tanto a nivel macro como microsocioal— que impiden establecer en términos concretos una clara relación entre dicho *rationale* y los procesos educativos sujetos a experimentación.

De ahí la urgencia —no sólo la conveniencia— de que los implementadores de estos nuevos programas educativos, en comunicación con distintos géneros de investigadores en ciencias sociales, se enfrenten abiertamente a estos obstáculos. De otro modo —sobra decirlo— les será imposible resolverlos.

Intentando resumirlos, tales obstáculos podrían clasificarse en las categorías siguientes:

1. Dificultades de carácter teórico inherentes, como decíamos más arriba, a la determinación y análisis de las posiciones estratégicas dentro de la estructura de poder;
2. Dificultades, también de carácter teórico, implicadas en el análisis profundo de los valores y procesos que potencialmente podrían ser promovidos por diversos tipos de educación; para lo cual es necesario detectar, previamente, los diversos significados e intencionalidades que atribuyen variados grupos sociales a determinados valores que, en abstracto, se consideran válidos para orientar el cambio social.
3. Dificultades de carácter metodológico atribuibles a la escasez de instrumentos de evaluación que pueden obtenerse de las ciencias que se ocupan del estudio de la conducta humana, con el fin de descubrir las formas y fuerzas latentes de participación, de distribución del poder y de conciencia política.

Todas estas dificultades representan retos concretos para cualquiera que desee realizar un análisis científico y a la vez crítico de las estructuras sociales, como prerequisite para la promoción de una sociedad distinta de la actual. Sin embargo, si no estamos de acuerdo con la perpetuación de las estructuras sociales vigentes, ni estamos dispuestos a esperar a que los conflictos latentes en nuestra sociedad la hagan evolucionar hacia modelos de organización todavía más indeseables, habrá que aceptarlos con franqueza, para poder resolverlos mediante la coordinación de esfuerzos de todos aquellos que, aun a partir de distintas perspectivas, deseamos para nuestro país otro destino.